

ACUERDO: CG-IEEPCO-20/2014, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DOCE.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se aprueba el dictamen consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, respecto de los informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce, que se genera a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos. Mediante acuerdo del Consejo General de este Instituto, dado en sesión ordinaria de fecha veintinueve de enero del dos mil nueve, se aprobaron los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, abrogando los que hasta esa fecha se encontraban vigentes. Señalando que dichos Lineamientos de Fiscalización, entraron en vigor a partir del día siguiente de su aprobación.

II. Acuerdo por el que se determinó el financiamiento público estatal para los Partidos Políticos correspondiente al ejercicio dos mil doce. Por acuerdo del Consejo General de este Instituto número CG-IEEPCO-1/2012, dado en sesión extraordinaria de fecha veintitrés de enero del dos mil doce, se determinó el financiamiento público estatal para los Partidos Políticos, correspondiente a ese mismo año, y se aprobó el calendario presupuestal de ministraciones mensuales, que se asignarían a los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Unidad Popular y Nueva Alianza, por concepto de prerrogativas del financiamiento público correspondiente a sus actividades electorales, generales y específicas, en la forma y términos establecidos en los artículos 52, inciso b) y 62, párrafo 1, incisos a), b) y



c), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, vigente al diez de agosto del dos mil doce.

III. Decreto que aprobó el Código Electoral vigente. Mediante Decreto número 1335, de fecha nueve de agosto del dos mil doce aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Oaxaca y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, edición extra, de fecha diez de agosto del año en curso, se emitió el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, derogando el Código de Instituciones políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, aprobado mediante decreto número 723, de fecha treinta y uno de octubre del dos mil ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha ocho de noviembre del mismo año.

IV. Registro del Partido Político Local Socialdemócrata de Oaxaca. En cumplimiento a la Resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SUP-JDC-1895/2012, el Consejo General de este Instituto otorgó a la Organización Estatal de Ciudadanos “Shuta Yoma” A.C., el registro como Partido Político Local, bajo la denominación “Partido Socialdemócrata de Oaxaca”, el cual fue con fecha retroactiva al seis de julio del doce, para efectos de que pudiera participar en el Proceso Electoral Ordinario 2012-2013.

V. Presentación de los informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce. En términos de lo establecido por los artículos 63, párrafo 1; 64, párrafo 1, inciso d) y 65, inciso a), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 117, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, 47, inciso a) y 49, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, dentro del plazo comprendido del uno de enero al treinta de marzo del dos mil trece, los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Unidad



Popular, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Oaxaca, presentaron sus respectivos informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce.

VI. Revisión de los informes. Una vez recibidos los informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una exhaustiva revisión a la documentación comprobatoria y contable presentada por los Partidos Políticos, dentro del plazo establecido en los artículos 66, inciso a), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 50, párrafo primero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión. Por lo que con fecha veinticinco de junio del dos mil trece, la Unidad Técnica de Fiscalización, con base en lo establecido por los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 65, párrafo 1, fracciones V, VI y VII, 118, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral en cita, y 50, párrafos primero y segundo, de los mencionados Lineamientos de Fiscalización, notificó a los Partidos Políticos los errores u omisiones técnicas advertidos en los informes anuales de referencia, a fin de que los aclararan o rectificaran en un plazo improrrogable de treinta días hábiles.

VII. Atención a las observaciones formuladas. Dentro del plazo de treinta días hábiles referido en el párrafo que antecede, que comprendió del veinticinco de junio al seis de agosto del dos mil trece, los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Unidad Popular, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Oaxaca, atendieron las observaciones formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización, presentando las aclaraciones que consideraron pertinentes a los errores u omisiones observados.

VIII. Observaciones que no se solventaron. con fecha veintiuno de agosto del dos mil trece, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió nuevamente las observaciones que no fueron solventadas en su totalidad por los partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la



Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Oaxaca, relacionadas con las referidas en el antecedente VI del presente acuerdo, otorgando un nuevo plazo improrrogable de cinco días hábiles a partir de su notificación para solventar las mismas, en base a lo establecido por los artículos 66, inciso c), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral vigente en el Estado, y 50, tercer párrafo, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión. En virtud de lo anterior dentro del plazo comprendió del veintidós al veintiocho de agosto del dos mil trece, los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Oaxaca, dieron contestación a las observaciones formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracciones XL y XLI, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, es atribución de este Consejo General vigilar que en lo relativo al financiamiento y a las prerrogativas de los Partidos Políticos, se actúe con apego a la Ley electoral, así como a lo dispuesto en los reglamentos o lineamientos que al efecto se expidan, así como conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

SEGUNDO. Legislación Electoral.

Que el diez de agosto del dos mil doce, fue publicado en el Periódico Oficial del gobierno del Estado el decreto número 1335, por el cual se aprobó el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, que entró en vigor el día siguiente al de dicha publicación, sin embargo, el Dictamen que nos ocupa es resultado de la



revisión efectuada por la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, respecto de los informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce, el cual se efectuó de conformidad con el Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del citado año, motivo por el que deben tomarse en consideración hasta esa fecha dichas disposiciones legales, ya que las mismas no contravienen la legislación vigente en la materia y no se afectan los derechos de los Partidos Políticos.

TERCERO. Función Constitucional y Legal

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114, primer párrafo, apartado B, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca; y 14, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, son fines de este Instituto contribuir al desarrollo de la vida e institucionalidad democrática del Estado; fortalecer el régimen de Partidos Políticos, y ser garante de los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Así mismo, el artículo 25, apartado B, fracciones II y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece que los Partidos Políticos recibirán en forma equitativa financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, y que la ley establecerá las reglas a las que se sujetará dicho financiamiento.

Que en términos de lo establecido por los artículos 92, fracción XI, y 63, párrafos 1 y 4, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; y 26, fracciones XL y XLI, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, es atribución y competencia del Consejo General de este Instituto, vigilar que en lo relativo al financiamiento y a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe conforme al propio Código Electoral, así como a lo dispuesto en los reglamentos o lineamientos que al efecto se expidan, y en consecuencia, aprobar el dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización quien en términos de la legislación referida, recibió, revisó y



dictaminó los informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce.

CUARTO. De las atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Que en términos de lo establecido por los artículos 117 y 118, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 63, párrafos 2 y 4; 64, incisos d), e) e i) y 66, inciso d), del Código Electoral vigente en el Estado hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismos que no se contravienen; 6, segundo párrafo; 50 y 52, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, es competente para llevar a cabo la revisión de los informes del origen, monto y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, y emitir el dictamen consolidado correspondiente, a fin de presentarlo ante el Consejo General de este Instituto.

QUINTO. De los informes de los Partidos Políticos.

Que los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Unidad Popular, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Oaxaca, entregaron sus respectivos informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil doce en tiempo y forma, ante la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 64, inciso d); y 65, inciso a), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 117, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, 8, fracción I y 47, inciso a), de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión; asimismo, los Partidos Políticos: Acción Nacional y Unidad Popular, subsanaron al cien por ciento las observaciones formuladas, atendiendo con ello lo establecido por los artículos 43, incisos p) y q), 63, párrafo 1, 65, inciso a) y 66, incisos b) y c), del Código Electoral vigente hasta el diez



de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, 1, 2, párrafo 2, 5, párrafos segundo y cuarto, 47, inciso a), 49 y 50, de los Lineamientos de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, lo que se aprecia en el dictamen correspondiente presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización.

SEXTO. Del informe presentado por el Partido Revolucionario Institucional.

Que visto el contenido del punto tercero resolutive del dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional, no subsanó al cien por ciento las observaciones formuladas, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca y 50, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos.

De conformidad con lo establecido por los artículos 66, incisos c) y f), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, y 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, está obligada a informar al Partido Político si las aclaraciones o rectificaciones efectuadas, subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane; asimismo, ante el Consejo General de este Instituto se presentará el dictamen y proyecto que haya formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; en mérito de lo anterior resulta importante determinar lo siguiente:



1. De la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional.

El Partido Revolucionario Institucional incurrió en una falta, toda vez que en su informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, no solventó en su totalidad las observaciones emitidas por la Unidad Técnica de Fiscalización incumpliendo con lo establecido por los artículos 62 párrafo 1, inciso a), fracciones I y III, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 50, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, lo anterior al demostrarse una falta de control administrativo.

2. La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues el Partido Revolucionario Institucional cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta leve, toda vez que al omitir cumplir con lo establecido por el artículo 118, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral Vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 66, inciso c), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; y 50, primer párrafo, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, siendo éste, la obligación del Partido Político de utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que disponga, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código.

Resulta insoslayable que los gastos erogados en diversas actividades y de las cuales no se puede comprobar debido a una falta de control administrativo, constituye una infracción, en virtud de que el Partido Político debió haber tenido la organización suficiente para llevar su administración conforme lo marca la ley.

En ese sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 270, fracción XI, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene



lo dispuesto por el artículo 279, párrafo 2, inciso f) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, relativo al incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos, lo procedente es imponer una sanción.

3. Clasificación de la falta.

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta leve, al no existir afectación a los recursos públicos que otorga el Estado por concepto de prerrogativas, toda vez que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de la fiscalización de partidos políticos.
- El partido no presentó una conducta reiterada.

4. Calificación de la falta cometida.

En conclusión, una vez expuesto el tipo de omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de la norma violentada y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo General considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente aplicar el financiamiento público de que dispongan, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida no es de relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como leve moderada.

No obstante lo anterior, no merece una calificación mayor, pues a pesar de haber sido leve, no se encuentran elementos subjetivos que agraven las consideraciones manifestadas en el párrafo anterior.



Por lo ya expuesto, este Consejo General califica la falta como leve moderada, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Revolucionario Institucional, por haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento público y su debida aplicación, al desprenderse en su informe anual correspondiente al dos mil doce, una falta de organización y control administrativo.

5. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de **entidad** es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por **lesión** entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que **detrimento** es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define **daño** como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional haya omitido cumplir con lo dispuesto en los artículos 66 inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulnera el principio tutelado por la norma aplicable.

6. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).



Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

7. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta cometida por el Partido Revolucionario Institucional, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como leve moderada.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.
- El Partido Revolucionario Institucional no presentó una conducta reiterada.
- El partido no es reincidente.
- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar la irregularidad encontrada.
- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Código Electoral y los lineamientos aplicables en la materia, por lo que contravino disposiciones que conocía previamente.
- Que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la ley, constituye una infracción, en virtud de que, por un lado, se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por la normatividad de la materia para evitar el desvío de recursos en perjuicio del erario público y del Estado; y por



otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de manera completa e integral la principalísima obligación que les es impuesta a los Partidos Políticos, como es lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vigentes en el ejercicio de revisión.

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el monto total implicado en las irregularidades.

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 279, párrafo 1, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“a).- Con amonestación pública;



b).- Con multas de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;

c).- Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d).- Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;

e).- Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;

f).- Con la suspensión de su registro como partido político local, o del financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos políticos nacionales acreditados; y

g).- Con la cancelación de su registro como partido político local.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, con excepción de las señaladas en el inciso g) por tratarse de un Partido Político Nacional y finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no



resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en el artículo 281, fracción I, incisos c) y e), de dicho ordenamiento legal invocado, no resultan convenientes para ser impuestas al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que la sanción consistente en la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución, y la supresión total de la entrega de ministraciones, resultarían inaplicables (por su naturaleza) o, en su caso, excesivas en tanto que resultarían desproporcionadas dadas las circunstancias tanto objetivas como subjetivas en que se presentó la falta, siendo que tales sanciones se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 281, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, consistente en multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo, resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que



puede ser graduada, siempre dentro del margen establecido por el mismo precepto legal.

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de leve moderada, las circunstancias de la ejecución de la infracción, y que no puso en peligro al bien jurídico protegido por las normas electorales, este Consejo General fija la sanción consistente en una amonestación pública y una multa de doscientos cuarenta días de salario mínimo diario general vigente en el Estado de Oaxaca en el dos mil doce, que fue el año en el que se cometió la falta, que equivale al importe de \$14,179.20, (catorce mil ciento setenta y nueve pesos 20/100 M.N.), misma que deberá ser pagada por el mencionado partido en términos de lo establecido por el artículo 286, párrafo 4, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el párrafo 7, del artículo 280, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismos que no se contravienen, ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

De la misma forma se debe dar vista a través de la Dirección General de este Instituto, a la autoridad competente para que determine lo procedente únicamente por lo que se refiere a las retenciones no enteradas por el Partido Revolucionario Institucional durante los ejercicios dos mil diez y dos mil once.

De esta manera, la sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en



cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en los artículos 281, fracción I, inciso b), y 286, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 279, párrafo 1, inciso a), y 280, párrafo 5, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SÉPTIMO. Del informe presentado por el Partido de la Revolución Democrática.

Que visto el contenido del punto cuarto resolutivo del dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática, no subsanó al cien por ciento las observaciones formuladas, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 43, incisos p) y q), 65, inciso a) y 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y



Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 50, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vigentes en el ejercicio de revisión.

De conformidad con lo establecido por los artículos 66, incisos c) y f), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, y 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, está obligada a informar al Partido Político si las aclaraciones o rectificaciones efectuadas, subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane; asimismo, ante el Consejo General de este Instituto se presentará el dictamen y proyecto que haya formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; en mérito de lo anterior resulta importante determinar lo siguiente:

1. De la falta cometida por el Partido de la Revolución Democrática.

El Partido de la Revolución Democrática incurrió en una falta, toda vez que en su informe anual correspondiente al dos mil doce, reflejó una falta de control administrativo incumpliendo con lo anterior lo establecido por los artículos 43, inciso q), y 62 párrafo 1, inciso a), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, los cuales esencialmente disponen que es obligación de los Partidos Políticos utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y como es el caso en concreto, llevar a cabo un eficaz control administrativo.

2. La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.



En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues el Partido de la Revolución Democrática cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta leve, toda vez que al omitir cumplir con lo establecido por el artículo 118, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral Vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos por los artículos 66, inciso c), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, siendo éste, la obligación de los Partidos Políticos de utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y como es el caso en concreto, llevar a cabo un eficaz control administrativo.

Los gastos erogados en diversas actividades, distintas a las destinadas, constituye una infracción, en virtud de que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias, en los cuales refleja una falta de control administrativo en el manejo de los recursos, lo cual está prohibido por el Código Electoral de la materia y los lineamientos aplicables.

En ese sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 270, fracción XI, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 279, párrafo 2, inciso f) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, relativo al incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos, lo procedente es imponer una sanción.

3. Clasificación de la falta.

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presentes las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta leve, al no existir afectación a los recursos públicos que otorga el Estado por concepto de prerrogativas, toda



vez que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias.

- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- El partido no presentó una conducta reiterada.

4. Calificación de la falta cometida.

En conclusión, una vez expuesto el tipo de omisión, las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de la norma violentada y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo General considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente en utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que disponga, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida no es de gran relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como leve moderada.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la gravedad de la falta debe calificarse como moderada, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues aunque no existió menoscabo a los recursos públicos, con su omisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

No obstante lo anterior, no merece una calificación mayor, pues a pesar de haber sido leve, no se encuentran elementos subjetivos que agraven las consideraciones manifestadas en el párrafo anterior.

Por lo ya expuesto, este Consejo General califica la falta como leve moderada, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido de la Revolución Democrática, por



haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento público y su debida aplicación.

5. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de **entidad** es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por **lesión** entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que **detrimento** es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define **daño** como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática haya omitido cumplir con lo dispuesto en los artículos 66 inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulnera el principio tutelado por la norma aplicable.

6. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido de la Revolución Democrática es reincidente respecto de una de las conductas que aquí se han analizado, toda vez que en el dos



mil diez y dos mil once liberó cheques sin tener los fondos suficientes para el pago de los mismos, como ocurrió en el caso que nos ocupa.

7. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta cometida por el Partido de la Revolución Democrática, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como leve moderada.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.
- El Partido de la Revolución Democrática no presentó una conducta reiterada.
- El partido es reincidente.
- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar la irregularidad encontrada.
- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Código Electoral y los lineamientos aplicables en la materia, por lo que contravino disposiciones que conocía previamente.
- Que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la ley, constituye una infracción, en virtud de que, por un lado, se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por la normatividad de la materia para evitar el desvío de recursos en perjuicio del erario público y del Estado; y por otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de manera completa e integral la principalísima obligación que les es impuesta



a los Partidos Políticos, como es lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vigentes en el ejercicio de revisión.

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el monto total implicado en las irregularidades.

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 279, párrafo 1, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“a).- Con amonestación pública;



b).- Con multas de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;

c).- Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d).- Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;

e).- Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;

f).- Con la suspensión de su registro como partido político local, o del financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos políticos nacionales acreditados; y

g).- Con la cancelación de su registro como partido político local.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, con excepción de las señaladas en el inciso g) por tratarse de un Partido Político Nacional y finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no



resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en el artículo 281, fracción I, incisos c) y e), de dicho ordenamiento legal invocado, no resultan convenientes para ser impuestas al Partido de la Revolución Democrática, toda vez que la sanción consistente en la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución, y la supresión total de la entrega de ministraciones, resultarían inaplicables (por su naturaleza) o, en su caso, excesivas en tanto que resultarían desproporcionadas dadas las circunstancias tanto objetivas como subjetivas en que se presentó la falta, siendo que tales sanciones se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 281, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, consistente en multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo, resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que



puede ser graduada, siempre dentro del margen establecido por el mismo precepto legal.

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de leve moderada, las circunstancias de la ejecución de la infracción, y que no se puso en peligro al bien jurídico protegido por las normas electorales, este Consejo General fija la sanción consistente en una amonestación pública y una multa de trescientos veinte días de salario mínimo diario general vigente en el Estado de Oaxaca en el dos mil doce, que fue el año en el que se cometió la falta, que equivale al importe de \$18,905.60, (dieciocho mil novecientos cinco pesos 60/100 M.N.), misma que deberá ser pagada por el mencionado partido en términos de lo establecido por el artículo 286, párrafo 4, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el párrafo 7, del artículo 280, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismos que no se contravienen, ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.



En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en los artículos 281 inciso b), y 286, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 279, párrafo 1, inciso a), y 280, párrafo 5, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

OCTAVO. Del informe presentado por el Partido Verde Ecologista de México.

Que visto el contenido del punto quinto resolutivo del dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte que el Partido Verde Ecologista de México, no subsanó al cien por ciento las observaciones formuladas, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca y 50, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos.

De conformidad con lo establecido por el artículo 66, incisos c) y f), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, y 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto,



está obligada a informar al Partido Político si las aclaraciones o rectificaciones efectuadas, subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane; asimismo, ante el Consejo General de este Instituto se presentará el dictamen y proyecto que haya formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; en mérito de lo anterior resulta importante determinar lo siguiente:

1. De la falta cometida por el Partido Verde Ecologista de México.

El Partido Verde Ecologista de México incurrió en una falta, toda vez que en su informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, no solventó en su totalidad las observaciones emitidas por la Unidad Técnica de Fiscalización incumpliendo con lo establecido por los artículos 62 párrafo 1, inciso a), fracciones I y III, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 50, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, lo anterior al demostrarse rebote de cheques por falta de fondos lo que se traduce en una falta de control administrativo.

2. La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues el Partido Verde Ecologista de México cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta leve, toda vez que al omitir cumplir con lo establecido por el artículo 118, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral Vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 66 inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; y 50, primer párrafo, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, siendo éste, la obligación de los Partidos Políticos al utilizar las



prerrogativas y aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Los gastos erogados en diversas actividades, distintas a las destinadas, constituye una infracción, en virtud de que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias, en los cuales refleja una falta de control administrativo en el manejo de los recursos, lo cual está prohibido por el Código Electoral de la materia y los lineamientos aplicables.

En ese sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 270, fracción XI, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 279, párrafo 2, inciso f) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, relativo al incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos, lo procedente es imponer una sanción.

3. Clasificación de la falta.

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta leve, al no existir afectación a los recursos públicos que otorga el Estado por concepto de prerrogativas, toda vez que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- El partido no presentó una conducta reiterada.

4. Calificación de la falta cometida.

En conclusión, una vez expuesto el tipo de omisión, las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia



de la norma violentada y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo General considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente en aplicar el financiamiento público de que dispongan, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida no es de relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como leve levísima.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la gravedad de la falta debe calificarse como moderada, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues aunque no existió menoscabo a los recursos públicos, con su omisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

No obstante lo anterior, no merece una calificación mayor, pues a pesar de haber sido leve, no se encuentran elementos subjetivos que agraven las consideraciones manifestadas en el párrafo anterior.

Por lo ya expuesto, este Consejo General califica la falta como leve levísima, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Verde Ecologista de México, por haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento público y su debida aplicación, al reportar en su informe anual correspondiente al dos mil doce, una falta de organización y control administrativo.

5. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de **entidad** es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por **lesión** entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que **detrimento** es la “destrucción leve o parcial de algo”.



Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define **daño** como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el Partido Verde Ecologista de México haya omitido cumplir con lo dispuesto en los artículos 66 inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulnera el principio tutelado por la norma aplicable.

6. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Verde Ecologista de México no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

7. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta cometida por el Partido Verde Ecologista de México, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como leve levísima.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.



- El Partido Verde Ecologista de México no presentó una conducta reiterada.
- El partido no es reincidente.
- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar la irregularidad encontrada.
- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Código Electoral y los lineamientos aplicables en la materia, por lo que contravino disposiciones que conocía previamente.
- Que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la ley, constituye una infracción, en virtud de que, por un lado, se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por la normatividad de la materia para evitar el desvío de recursos en perjuicio del erario público y del Estado; y por otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de manera completa e integral la principalísima obligación que les es impuesta a los Partidos Políticos, como es lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión.

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las



normas transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el monto total implicado en las irregularidades.

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 279, párrafo 1, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“a).- Con amonestación pública;

b).- Con multas de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;

c).- Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d).- Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;



e).- Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;

f).- Con la suspensión de su registro como partido político local, o del financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos políticos nacionales acreditados; y

g).- Con la cancelación de su registro como partido político local.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, con excepción de las señaladas en los incisos g) por tratarse de un Partido Político Nacional y finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos



políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en el artículo 281, fracción I, incisos c) y e), de dicho ordenamiento legal invocado, no resultan convenientes para ser impuestas al Partido Verde Ecologista de México, toda vez que la sanción consistente en la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución, y la supresión total de la entrega de ministraciones, resultarían inaplicables (por su naturaleza) o, en su caso, excesivas en tanto que resultarían desproporcionadas dadas las circunstancias tanto objetivas como subjetivas en que se presentó la falta, siendo que tales sanciones se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 281, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, consistente en multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo, resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que puede ser graduada, siempre dentro del margen establecido por el mismo precepto legal.

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de leve levísima, las circunstancias de la ejecución de la infracción, y que no se puso en peligro al bien jurídico protegido por las normas electorales, este Consejo General fija la sanción consistente en una multa de ochenta días de salario mínimo diario general vigente en el Estado de Oaxaca en el dos



mil doce, que fue el año en el que se cometió la falta, que equivale al importe de \$4,726.40, (cuatro mil setecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.), misma que deberá ser pagada por el mencionado partido en términos de lo establecido por el artículo 286, párrafo 4, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el párrafo 7, del artículo 280, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismos que no se contravienen, ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en los artículos 281 inciso b), y 286, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 279, párrafo 1, inciso a), y 280,



párrafo 5, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOVENO. Del informe presentado por el Partido del Trabajo.

Que visto el contenido del punto sexto resolutive del dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte que el Partido del Trabajo, no subsanó al cien por ciento las observaciones formuladas, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca y 50, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión.

De conformidad con lo establecido por el artículo 66, incisos c) y f), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, y 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, está obligada a informar al Partido Político si las aclaraciones o rectificaciones efectuadas, subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane; asimismo, ante el Consejo General de este Instituto se presentará el dictamen y proyecto que haya formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; en mérito de lo anterior resulta importante determinar lo siguiente:

1. De la falta cometida por el Partido del Trabajo.

El Partido del Trabajo incurrió en una falta, toda vez que en su informe anual correspondiente al dos mil doce no justificó de manera congruente documentación comprobatoria señalada como gastos no procedentes y gastos pendientes de aclarar; no requisitó de manera correcta treinta y



nueve recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas; no enteró las retenciones efectuadas por concepto de Honorarios asimilables a sueldos, y no reclasificó en su totalidad la documentación comprobatoria, incumpliendo con lo anterior lo establecido por los artículos 43, inciso q), y 62 párrafo 1, inciso a), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, los cuales esencialmente disponen que es obligación de los Partidos Políticos utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y como es el caso en concreto, llevar a cabo un eficaz control administrativo.

2. La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues el Partido del Trabajo cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta grave, toda vez que al omitir cumplir con lo establecido por el artículo 118, párrafo 1, fracción II, del Código Electoral Vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 66, inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 106 y 109, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, siendo éste, la obligación de los Partidos Políticos al utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Resulta insoslayable que los gastos erogados en diversas actividades distintas a las destinadas, constituye una infracción, en virtud de que se tratan de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias, en los cuales se reflejan lo señalado en el punto número 1 del presente apartado.



En ese sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 270, fracción XI, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 279, párrafo 2, inciso f) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, relativo al incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos, lo procedente es imponer una sanción.

3. Clasificación de la falta.

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta grave, al existir afectación a los recursos públicos que otorga el Estado por concepto de prerrogativas, toda vez que se tratan de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- El partido no presentó una conducta reiterada.

4. Calificación de la falta cometida.

En conclusión, una vez expuesto el tipo de omisión, las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de las normas violentadas y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo General considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente en garantizar la fuente legítima de los recursos con los que cuentan los partidos políticos, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida es de gran relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como grave especial.



Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la falta debe calificarse como especial, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues aunque no existió menoscabo a los recursos públicos, con su omisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

Por lo ya expuesto, este Consejo General califica la falta como grave especial, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido del trabajo, por haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento público y su debida aplicación, al reportar en su informe anual correspondiente al dos mil doce, los errores y omisiones señalados con anterioridad.

5. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de **entidad** es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por **lesión** entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que **detrimento** es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define **daño** como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el Partido del Trabajo haya omitido cumplir con lo dispuesto en los artículos 66 inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos



Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulnera el principio tutelado por la norma aplicable.

6. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido del Trabajo no es reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.

7. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta cometida por el Partido del Trabajo, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como grave especial.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.
- El Partido del Trabajo presentó una conducta reiterada.
- El partido no es reincidente.
- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar la irregularidad encontrada.
- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Código Electoral y los lineamientos aplicables en la materia, por lo que contravino disposiciones que conocía previamente.



- Que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la ley, constituye una infracción, en virtud de que, por un lado, se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por la normatividad de la materia para evitar el desvío de recursos en perjuicio del erario público y del Estado; y por otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de manera completa e integral la principalísima obligación que les es impuesta a los Partidos Políticos, como es lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vigentes en el ejercicio de revisión.

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el monto total implicado en las irregularidades.

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 281, fracción I, del



Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 279, párrafo 1, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismo que en sus diversas fracciones señala:

- “a).- Con amonestación pública;*
- b).- Con multas de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;*
- c).- Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución;*
- d).- Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;*
- e).- Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;*
- f).- Con la suspensión de su registro como partido político local, o del financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos políticos nacionales acreditados; y*
- g).- Con la cancelación de su registro como partido político local.”*

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, con excepción de las señaladas en el inciso g) por tratarse de un Partido Político Nacional y finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.



Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en el artículo 281, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento legal invocado, no resulta conveniente para ser impuesta al Partido del Trabajo, toda vez que la sanción consistente en la supresión total de la entrega de ministraciones, resultaría inaplicable (por su naturaleza) o, en su caso, excesiva en tanto que resultaría desproporcionada dadas las circunstancias tanto objetivas como subjetivas en que se presentó la falta.

No obstante lo anterior, la sanción que se debe aplicar al Partido del trabajo debe ser ejemplar ya que la gravedad de la falta cometida es de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas.



En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 281, fracción I, inciso c), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, consistente en la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución.

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de grave especial, las circunstancias de la ejecución de la infracción, y que se puso en peligro al bien jurídico protegido por las normas electorales, este Consejo General fija la sanción consistente en la reducción del cuarenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponden al Partido del Trabajo para el ejercicio dos mil catorce, que corresponden a la cantidad de \$617,454.49 (seiscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), misma que deberá ser pagada por el mencionado partido en términos de lo establecido por el artículo 286, párrafo 4, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el párrafo 7, del artículo 280, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismos que no se contravienen, ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

La sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.



De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en los artículos 281 inciso b), y 286, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 279, párrafo 1, inciso a), y 280, párrafo 5, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

DÉCIMO. Del informe presentado por el Partido Movimiento Ciudadano.

Que visto el contenido del punto séptimo resolutivo del dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano, no subsanó al cien por ciento las observaciones formuladas, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca y 50, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos.



De conformidad con lo establecido por los artículos 66, incisos c) y f), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, y 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, está obligada a informar al Partido Político si las aclaraciones o rectificaciones efectuadas, subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane; asimismo, ante el Consejo General de este Instituto se presentará el dictamen y proyecto que haya formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; en mérito de lo anterior resulta importante determinar lo siguiente:

1. De la falta cometida por el Partido Movimiento Ciudadano.

El Partido Movimiento Ciudadano incurrió en una falta, toda vez que en su informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, no solventó en su totalidad las observaciones emitidas por la Unidad Técnica de Fiscalización incumpliendo con lo establecido por los artículos 62 párrafo 1, inciso a), fracciones I y III, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 50, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, lo anterior al demostrarse la transferencia de recurso público estatal ordinario a una cuenta personal.

2. La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues el Partido Movimiento Ciudadano cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta leve, toda vez que al omitir cumplir con lo establecido por el artículo 118, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral Vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 66, inciso c), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; y



50, primer párrafo, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, siendo éste, la obligación del Partido Político de utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que disponga, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código.

Resulta insoslayable que los gastos erogados en diversas actividades y de las cuales no se puede comprobar debido a la transferencia de recurso público estatal ordinario a una cuenta personal, constituye una infracción, en virtud de que el Partido Político debió haber tenido la organización suficiente para llevar su administración conforme lo marca la ley.

En ese sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 270, fracción XI, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 279, párrafo 2, inciso f) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, relativo al incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos, lo procedente es imponer una sanción.

3. Clasificación de la falta.

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta leve, al no existir afectación a los recursos públicos que otorga el Estado por concepto de prerrogativas, toda vez que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de la fiscalización de partidos políticos.
- El partido no presentó una conducta reiterada.

4. Calificación de la falta cometida.



En conclusión, una vez expuesto el tipo de omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de la norma violentada y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo General considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente aplicar el financiamiento público de que dispongan, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida es de relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como leve agravada.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la falta debe calificarse como agravada, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues aunque no existió menoscabo a los recursos públicos, con su omisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

Por lo ya expuesto, este Consejo General califica la falta como leve agravada, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Movimiento Ciudadano, por haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento público y su debida aplicación, al desprenderse en su informe anual correspondiente al dos mil doce, la transferencia de recurso público estatal ordinario a una cuenta personal.

5. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de **entidad** es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por **lesión** entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que **detrimento** es la “destrucción leve o parcial de algo”.



Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define **daño** como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el Partido Movimiento Ciudadano haya omitido cumplir con lo dispuesto en los artículos 66 inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulnera el principio tutelado por la norma aplicable.

6. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Movimiento Ciudadano no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

7. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta cometida por el Partido Movimiento Ciudadano, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como leve agravada.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.



- El Partido Movimiento Ciudadano no presentó una conducta reiterada.
- El partido no es reincidente.
- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar la irregularidad encontrada.
- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Código Electoral y los lineamientos aplicables en la materia, por lo que contravino disposiciones que conocía previamente.
- Que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la ley, constituye una infracción, en virtud de que, por un lado, se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por la normatividad de la materia para evitar el desvío de recursos en perjuicio del erario público y del Estado; y por otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de manera completa e integral la principalísima obligación que les es impuesta a los Partidos Políticos, como es lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vigentes en el ejercicio de revisión.

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las



normas transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el monto total implicado en las irregularidades.

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 279, párrafo 1, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“a).- Con amonestación pública;

b).- Con multas de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;

c).- Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d).- Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;



e).- Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;

f).- Con la suspensión de su registro como partido político local, o del financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos políticos nacionales acreditados; y

g).- Con la cancelación de su registro como partido político local.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, con excepción de las señaladas en el inciso g) por tratarse de un Partido Político Nacional y finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos



políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en el artículo 281, fracción I, incisos c) y e), de dicho ordenamiento legal invocado, no resultan convenientes para ser impuestas al Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que la sanción consistente en la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución, y la supresión total de la entrega de ministraciones, resultarían inaplicables (por su naturaleza) o, en su caso, excesivas en tanto que resultarían desproporcionadas dadas las circunstancias tanto objetivas como subjetivas en que se presentó la falta, siendo que tales sanciones se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 281, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, consistente en multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo, resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que puede ser graduada, siempre dentro del margen establecido por el mismo precepto legal.

En el presente caso, esta sanción se considera como la adecuada para garantizar el cumplimiento de los fines de la normatividad sancionadora electoral, como son la represión de futuras conductas irregulares, similares al partido infractor y la inhibición de la reincidencia en las mismas.

Es así que tomando en cuenta que la falta sustantiva se calificó de leve agravada, las circunstancias de la ejecución de la infracción, y que no puso en peligro al bien jurídico protegido por las normas electorales, este Consejo General fija la sanción consistente en una amonestación pública y una multa de cuatro mil días de salario mínimo diario general vigente



en el Estado de Oaxaca en el dos mil doce, que fue el año en el que se cometió la falta, que equivale al importe de \$236,320.00, (doscientos treinta seis mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), misma que deberá ser pagada por el mencionado partido en términos de lo establecido por el artículo 286, párrafo 4, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el párrafo 7, del artículo 280, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismos que no se contravienen, ello con la finalidad de que la sanción genere un efecto disuasivo que evite en el futuro la comisión de conductas ilegales similares, y que exista proporción entre la sanción que se impone y la falta que se valora.

De esta manera, la sanción que se impone resulta proporcional al caso concreto, en razón de que es adecuada la respuesta punitiva de la administración a la entidad exacta del comportamiento infractor cometido, pues se trata de reprimir que la comisión de la infracción en cuestión resulte más benéfico para el infractor, que el cumplimiento de la norma infringida.

De no considerarse tal criterio, se generaría una suerte de incentivo (costo-beneficio) para la comisión de infracciones atendiendo al costo de oportunidad, porque la sanción no sería eficaz para desalentar la comisión de infracciones futuras.

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Movimiento Ciudadano, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en los artículos 281, fracción I, inciso b), y 286, del Código Electoral vigente en el Estado



que no contraviene lo dispuesto por los artículos 279, párrafo 1, inciso a), y 280, párrafo 5, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

UNDÉCIMO. Del informe presentado por el Partido Nueva Alianza.

Que visto el contenido del punto séptimo resolutivo del dictamen consolidado presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte que el Partido Nueva Alianza, no subsanó al cien por ciento las observaciones formuladas, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca y 50, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos.

De conformidad con lo establecido por los artículos 66, incisos c) y f), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, y 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de este Instituto, está obligada a informar al Partido Político si las aclaraciones o rectificaciones efectuadas, subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane; asimismo, ante el Consejo General de este Instituto se presentará el dictamen y proyecto que haya formulado la Unidad Técnica de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; en mérito de lo anterior resulta importante determinar lo siguiente:

1. De la falta cometida por el Partido Nueva Alianza.

El Partido Nueva Alianza incurrió en una falta, toda vez que en su informe anual correspondiente al ejercicio dos mil doce, no solventó en su totalidad las observaciones emitidas por la Unidad Técnica de Fiscalización incumpliendo con lo establecido por los artículos 62 párrafo



1, inciso a), fracciones I y III, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 50, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, lo anterior al demostrarse el rebote de cheque por falta de fondos y presentar un importe de impuestos por pagar.

2. La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.

En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues el Partido Nueva Alianza cometió una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta leve, toda vez que al omitir cumplir con lo establecido por el artículo 118, párrafo 1, fracción III, del Código Electoral Vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por los artículos 66, inciso c), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; y 50, primer párrafo, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, siendo éste, la obligación del Partido Político de utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento de que disponga, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código.

Resulta insoslayable que los gastos erogados en diversas actividades y de las cuales no se puede comprobar debido a la transferencia de recurso público estatal ordinario a una cuenta personal, constituye una infracción, en virtud de que el Partido Político debió haber tenido la organización suficiente para llevar su administración conforme lo marca la ley.

En ese sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 270, fracción XI, del Código Electoral vigente en el Estado que no contraviene lo dispuesto por el artículo 279, párrafo 2, inciso f) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, relativo al incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de los recursos o para



la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos, lo procedente es imponer una sanción.

3. Clasificación de la falta.

Para la calificación de la infracción, resulta necesario tener presente las siguientes consideraciones:

- Se trata de una falta leve, al no existir afectación a los recursos públicos que otorga el Estado por concepto de prerrogativas, toda vez que se trata de recursos del financiamiento público otorgado para sus actividades ordinarias.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores protegidos por la legislación electoral aplicable en materia de la fiscalización de partidos políticos.
- El partido no presentó una conducta reiterada.

4. Calificación de la falta cometida.

En conclusión, una vez expuesto el tipo de omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como, en especial la relevancia y trascendencia de la norma violentada y los efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Consejo General considera que al tratarse de una violación al bien jurídico consistente aplicar el financiamiento público de que dispongan, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como los principios de certeza en la rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos del partido político, la falta cometida es de relevancia. En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como leve moderada.

Con independencia de lo anterior, al analizar las circunstancias específicas y tomar en consideración que no existió dolo en el actuar del partido político, la falta debe calificarse como especial, en razón de que la infracción es considerada como material o de resultado, pues aunque no existió menoscabo a los recursos públicos, con su omisión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la



normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

Por lo ya expuesto, este Consejo General califica la falta como leve moderada, debiendo proceder a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Nueva Alianza, por haber incurrido en una falta a la normatividad inherente al financiamiento público y su debida aplicación, al desprenderse en su informe anual correspondiente al dos mil doce, el rebote de cheque por falta de fondos y presentar un importe de impuestos por pagar.

5. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una de las acepciones de **entidad** es el “Valor o importancia de algo”, mientras que por **lesión** entiende “daño, perjuicio o detrimento”. Por otro lado, establece que **detrimento** es la “destrucción leve o parcial de algo”.

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, Argentina Buenos Aires, define **daño** como la “expresión que alude al detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que el Partido Nueva Alianza haya omitido cumplir con lo dispuesto en los artículos 66 inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos vigentes en el ejercicio de revisión, vulnera el principio tutelado por la norma aplicable.



6. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el Partido Nueva Alianza no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

7. Imposición de la sanción.

Del análisis realizado a la conducta cometida por el Partido Nueva Alianza, se desprende lo siguiente:

- La falta se calificó como leve moderada.
- Con la actualización de la falta se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos.
- No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del partido.
- El Partido Nueva Alianza no presentó una conducta reiterada.
- El partido no es reincidente.
- El instituto político no demostró mala fe en su conducta, por el contrario, cooperó con la autoridad fiscalizadora a fin de intentar subsanar la irregularidad encontrada.
- Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Código Electoral y los lineamientos aplicables en la materia, por lo que contravino disposiciones que conocía previamente.
- Que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la ley, constituye una infracción, en virtud de que, por un lado, se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por la normatividad de la materia para evitar el



desvío de recursos en perjuicio del erario público y del Estado; y por otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de manera completa e integral la principalísima obligación que les es impuesta a los Partidos Políticos, como es lo establecido en los artículos 66, inciso b), del Código Electoral vigente hasta el diez agosto del dos mil doce; 118, párrafo 1, fracción III, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y 55, párrafo tercero, de los Lineamientos de Fiscalización del Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, vigentes en el ejercicio de revisión.

En este tenor es relevante señalar que el monto involucrado no es un parámetro o elemento primordial ni exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas, por lo que esta autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos, tanto objetivos como subjetivos para fijar el monto de la misma, entre ellos, el tipo de infracción, el bien jurídico tutelado y vulnerado, la trascendencia de las normas transgredidas, la reincidencia de la conducta, la reiteración de la falta y no únicamente el monto total implicado en las irregularidades.

Al respecto, cabe precisar que el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-89/2007, presupone que en ciertos casos, como en el que nos ocupa, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para ello debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 279, párrafo 1, del Código Electoral vigente hasta el diez de agosto del dos mil doce, mismo que en sus diversas fracciones señala:



“a).- Con amonestación pública;

b).- Con multas de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;

c).- Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d).- Con hasta un tanto del monto ejercido en exceso, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta dos tantos;

e).- Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;

f).- Con la suspensión de su registro como partido político local, o del financiamiento público para actividades ordinarias, si se trata de partidos políticos nacionales acreditados; y

g).- Con la cancelación de su registro como partido político local.”

Así las cosas, corresponde seleccionar una de las sanciones establecidas en el artículo 281, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, con excepción de las señaladas en el inciso g) por tratarse de un Partido Político Nacional y finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la graduación concreta idónea.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así



como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad.

Así las cosas, tomando en consideración lo antes expuesto, se tiene que las sanciones aludidas en el artículo 281, fracción I, incisos c) y e), de dicho ordenamiento legal invocado, no resultan convenientes para ser impuestas al Partido Nueva Alianza, toda vez que la sanción consistente en la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que señale la resolución, y la supresión total de la entrega de ministraciones, resultarían inaplicables (por su naturaleza) o, en su caso, excesivas en tanto que resultarían desproporcionadas dadas las circunstancias tanto objetivas como subjetivas en que se presentó la falta, siendo que tales sanciones se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en el artículo 281, fracción I, inciso b), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, consistente en multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo, resulta la idónea para el caso que nos ocupa, toda vez que